

Los rectores piden al Gobierno impulsar el mecenazgo universitario

Su presidenta saliente reclama cambios normativos para paliar los estragos contables

JUANJO BECERRA / Madrid

Las universidades públicas españolas dan por perdida la batalla por la financiación pública. Después de cinco años peleando contra el Gobierno y las comunidades autónomas por los sucesivos recortes presupuestarios, han decidido emprender un nuevo camino para asegurar su supervivencia. Así lo manifestaron sus máximos mandatarios hace unos días, durante la presentación de *La Universidad en cifras*, el informe estadístico que edita bienalmente la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y que en esta edición (con datos referidos al curso 2010-2011), refleja ya los primeros síntomas de los estragos contables provocados por la crisis económica.

En sus últimas palabras, prácticamente, como presidenta de esta organización, Adelaida de la Calle destacó la intención de los campus de buscar «colaboraciones y recursos externos» para contrarrestar las insuficiencias e ineficiencias financieras que padecen. Para ello, reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que introduzca cambios normativos que faciliten el mecenazgo y el patrocinio a los centros de educación superior. «Necesitan una mejor regulación, porque por este camino será difícil aumentarlos», afirmó De la Calle, que horas después sería relevada en el cargo por el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López.

Más de 10.600 millones

En el curso 2010-2011, las universidades públicas españolas ingresaron más de 10.600 millones de euros. De ellos, casi seis de cada 10 euros (58,4%) tenían su origen en las transferencias corrientes que reciben anualmente de las comunidades autónomas; un 11,8%, en las tasas pagadas por los estudiantes; un 3,7%, en la prestación de servicios de docencia e investigación; y un 2,4%, en la firma de contratos con otras empresas, personas o instituciones para la realización de trabajos de carácter científico técnico o artístico.

Por tanto, la financiación privada aún está lejos de representar una parte sustancial en las arcas de los rectorados, a diferencia de otros sistemas universitarios, como el americano. Al otro lado del atlántico, los campus prestan mucha atención a las donaciones y otras aportaciones de diversa índole.

«La Universidad de Nueva York recaudó el año pasado por esta vía 178 millones de dólares (131 millones de euros); la de Columbia, 147 (108); y la Northwestern, 180 (132)», apunta Begoña Gómez, codirectora del Magister en Direc-

ción de Captación de Fondos del Centro Superior de Estudios de Gestión, el primer título en España sobre esta materia con valor universitario.

Esta experta enumera los cambios legislativos que serían necesarios para potenciar el patrocinio en la educación superior y la investigación española. «La ley de mecenazgo es mejor casi en cualquier país de nuestro entorno que en España. Aquí, un individuo o una empresa sólo se puede desgravar

fiscalmente entre el 25% y el 35% de las aportaciones que haga a la universidad, mientras que en Francia alcanza el 66% y en EEUU el 100%», plantea.

De esta forma, acercarse al modelo americano implicaría que la Agencia Tributaria dejara de recaudar determinadas cantidades en beneficio de las cuentas universitarias, algo que podría despertar polémicas en tiempos de crisis. Del mismo modo, muchos colectivos verían con recelos que el capital privado ganara

peso en los campus públicos por miedo a que los donantes pudieran interferir en su orientación académica y en su actividad.

«Eso no tiene por qué ocurrir. Al final, la empresa no hace una donación para el conjunto de la universidad, sino para algo concreto, como una cátedra o un proyecto de investigación, y a cambio consigue que su logo aparezca reflejado, poder hacer publicidad de esa labor de mecenazgo, contar con un stand en las ferias de empleo de la uni-

versidad...», explica Begoña Gómez, que introduce un matiz: «Sería conveniente no descuidar la financiación pública precisamente para que no caiga todo el peso en la parte privada», sugiere.

Muchas de esas inversiones puntuales ya existen en España, y universidades como la Jaume I, la Politécnica de Cataluña y la de Barcelona han puesto en marcha iniciativas pioneras en ese sentido. Especialmente en los últimos meses, con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a los estudiantes que no pueden pagar las elevadas tasas académicas.

Asimismo, si en EEUU los tres grandes mecenas son las fundaciones Gates, Ford y Rockefeller, en España ha sido el Banco Santander el que se ha significado en ese terreno a lo largo de las últimas dos décadas.



El ministro Wert, conversando con Adelaida de la Calle, ex presidenta de los rectores, en una cita en el Consejo de Universidades. / EFE

El alegato contra los recortes, en cifras

Entre 2002 y 2011, han desaparecido 394 enseñanzas de los campus españoles

J. B. / Madrid

Al margen de la apuesta por el mecenazgo, el último informe *La Universidad española en cifras* destaca por ser un documento político, un alegato en contra de los recortes presupuestarios y en defensa del uso responsable que hacen los campus nacionales de los recursos que les asignan las administraciones públicas. En muchos casos, a costa de elegir cuidadosamente las cifras que se presentan.

Así, por ejemplo, en él se afirma que, entre el curso 2002-2003 y el 2010-2011, desaparecen 394 enseñanzas, lo que supone un retroceso del 15%. Tal y como se

expuso en la presentación del informe, con este argumento se pretende desmontar la acusación de que la oferta académica ha crecido de forma incontrolada en los últimos años al calor del Proceso de Bolonia.

Sin embargo, ese cálculo se realiza contabilizando sólo las antiguas diplomaturas y licenciaturas (2.586 planes de estudios hace 10 cursos), así como los nuevos grados europeos (2.192, contando los planes antiguos en extinción), pero dejando al margen los 2.263 másteres que antes no existían y que, en muchos casos, sustituyen a segundos ciclos.

Este enfoque político supone

una gran diferencia respecto a las seis ediciones precedentes de *La Universidad española en cifras*, que eran documentos esencialmente estadísticos y con mucha menos interpretación de los datos.

De hecho, el cambio comienza por la autoría del informe. En esta ocasión, la CRUE se lo ha encargado a la Cátedra Unesco de Política y Gestión Universitaria, dirigida por Francisco Michavila, en lugar de al responsable de los estudios precedentes, el profesor de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros.

Entre los motivos de ese cambio destaca que este último fuera

el responsable de un artículo publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo en el que se afirmaba que la ineficiente organización de las universidades españolas hace que ésta malgaste dos de cada tres euros. Un argumento que, en plena batalla contra los recortes, no sentó nada bien en el seno de la CRUE.

En esta ocasión, Hernández Armenteros se ha limitado a coordinar la recogida de datos estadísticos, pero no se le ha encargado ninguno de los artículos que los analizan, pese a ser uno de los principales expertos españoles en el asunto de la financiación universitaria.